

Adorni, los dólares «en negro» y las dos Argentinas

11/06/2026



La declaración jurada presentada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lejos de despejar las dudas que existían sobre su patrimonio, abrió nuevos interrogantes. El funcionario aseguró que una parte sustancial de su fortuna proviene de inversiones realizadas en Bitcoin hace más de una década y reconoció la existencia de ahorros que permanecieron fuera de los registros formales durante años. Según la documentación presentada, se trata de más de medio millón de dólares.

La Justicia determinará si esas explicaciones alcanzan para justificar la evolución de su patrimonio. No corresponde anticipar culpabilidades ni reemplazar el trabajo de los jueces. Pero sí corresponde detenerse en el mensaje político que deja una situación de estas características.

Porque mientras el principal vocero del ajuste libertario intenta explicar el origen de una fortuna valuada en cientos de miles de dólares, millones de argentinos atraviesan una realidad diametralmente opuesta.

Existe una Argentina que discute cómo justificar más de 500.000 dólares en criptomonedas y otra que se pregunta cómo llegar a fin de mes.

La distancia entre ambas realidades se vuelve especialmente evidente en lugares como San Rafael. Aquí, la crisis económica no se mide en indicadores financieros ni en gráficos de consultoras. Se mide en comercios que bajan sus persianas, en familias que resignan consumos básicos, en emprendedores que ya no pueden sostener sus negocios y en trabajadores que ven deteriorarse su poder adquisitivo mes tras mes.

Las calles comerciales del departamento ofrecen una radiografía contundente. Locales vacíos, carteles de alquiler y una actividad económica que dista mucho de los discursos oficiales que hablan de recuperación y crecimiento.

A ello se suma la profunda crisis agroproductiva que atraviesa el sur mendocino. Productores vitivinícolas, frutícolas y ganaderos enfrentan costos cada vez más altos, rentabilidades en caída y mercados internos deprimidos. En una región donde el agro constituye uno de los motores centrales de la economía, el impacto se multiplica sobre toda la cadena comercial y laboral.

Mientras tanto, desde el Gobierno Nacional se insiste en que el sacrificio actual traerá prosperidad futura. Puede ser una discusión legítima. Lo que resulta más difícil de explicar es cómo quienes pregonan austeridad, transparencia y esfuerzo individual aparecen periódicamente envueltos en controversias patrimoniales que generan más preguntas que respuestas.

La figura de Adorni adquiere una dimensión simbólica por ser uno de los rostros más visibles del Gobierno. Durante meses

fue quien explicó los recortes, defendió los ajustes y pidió comprensión a una sociedad golpeada. Por eso mismo, cuando surge una discusión sobre cientos de miles de dólares no declarados, el impacto político es inevitable.

La cuestión de fondo no es solamente jurídica. Es también moral y política.

Porque mientras una familia sanrafaelina calcula si podrá afrontar la próxima factura de servicios, mientras un comerciante intenta sobrevivir a la caída del consumo y mientras un productor agrícola lucha por sostener su actividad, la noticia nacional gira en torno a funcionarios que discuten cómo justificar patrimonios millonarios.

Son dos Argentinas que conviven en el mismo tiempo histórico, pero que parecen habitar mundos completamente distintos.

Y quizás allí radique el verdadero problema. No en la existencia de una fortuna, sino en la creciente distancia entre quienes gobiernan y quienes padecen las consecuencias de las decisiones que se toman desde el poder.

Porque cuando la política pierde contacto con la realidad cotidiana de la gente, las declaraciones juradas dejan de ser simples documentos administrativos para convertirse en el reflejo de una desconexión cada vez más profunda entre los dirigentes y la sociedad que dicen representar.